

NUE 27-ADP-2020 (LS)

██████████ contra el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con cuarenta y dos minutos del cinco de febrero de dos mil veintiuno.

A. Descripción del caso

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por ██████████, a través de sus representantes ██████████ y ██████████, en contra de la resolución emitida por el Oficial de Información del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el 25 de febrero del 2020.

I. La apelante, ██████████, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) del MJSP; solicitud de acceso a datos personales consistente en: *"Expediente que incluya todo lo relacionado a la vinculación laboral, contrato de prestación de servicios profesionales, oficio de autorización de nombramiento en la Ley de Salarios, refrenda de partida de Ley de Salarios, procedimientos administrativos, sancionatorios, promociones, evaluaciones, aumentos salariales, procedimiento y resolución de despido y cualquier información personal que exista en esa dependencia de Estado, respecto a ██████████, que es empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde el año 2015 a la fecha, desempeñando el cargo de Técnico Especialista IV"* todo en copia certificada.

Por su parte, el Oficial de Información del MJSP resolvió entregar 45 folios de fotocopias relativas a la información solicitada.

No obstante, la apelante manifestó su inconformidad debido a que de los 45 folios entregados se hace la observación que estos carecen de sello institucional, firma o rúbrica del funcionario que les certifica y por lo tanto dicha documentación no ha sido entregada en el



formato solicitado, sino más bien en formato de fotocopias simples, además que la información a la que se hace relación se encuentra incompleta, dado que se omitió la documentación consistente en *“procedimiento de despido; que comprenda desde la legitimación del funcionario con poder de decisión, procedimiento aplicado, notificaciones efectuadas... para ejercer su defensa, identificación de la falta cometida, o análisis técnico que sustente el despido, entre otros.*

II. El Instituto admitió la apelación en los términos descritos y asignó el presente caso a la comisionada Yanira del Carmen Cortez Estévez, no obstante, dado el nombramiento en el cargo, el caso se reasignó el caso al comisionado Luis Javier Suárez Magaña para instruir el procedimiento, conforme a lo establecido en el 87 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al MJSP para que rindiera su informe. Pese a lo anterior, dicha entidad omitió realizar pronunciamiento alguno respecto de la apertura del presente procedimiento y su oportunidad de defensa para justificar su actuación frente a la solicitud del apelante.

III. De conformidad a lo establecido en los artículos 3, letra “g” y 102 de la LAIP, en relación a los artículos 203 y 205 del Código Procesal Civil y Mercantil y el artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos se llevó a cabo la audiencia oral correspondiente a este procedimiento, esta se desarrolló de manera virtual con la comparecencia de los representantes de la apelante, a su vez, se hizo constar la incomparecencia del ente obligado pese haberse realizado los respectivos actos de comunicación en legal tiempo y forma.

Dentro de dicha audiencia, los representantes de la apelante reiteraron el contenido de su solicitud.

2. Análisis del Caso.

Una vez establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) consideraciones sobre la protección de datos personales con especial énfasis en el derecho de

acceso a la información personal; (II) breve referencia al tratamiento de datos personales en el ámbito laboral; y (III) análisis sobre la entrega de lo solicitado por la apelante.

I. El artículo 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia de Amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales, es el medio por el cual se salvaguardan los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, al establecer un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas.

Entre los derechos o modos de ejercicio de esta faceta material resulta pertinente mencionar: “(…) b) La libertad de acceso, facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone información sobre uno mismo, conocer el origen del que procede y la finalidad que persigue”. De ello se colige, que el derecho de acceso en materia de datos personales, no se limita a solo a acceder a la información sobre uno mismo, sino a también conocer quien la proporcionó y con qué finalidad se está realizando el tratamiento por parte del ente obligado.

Por otro lado, el derecho a la autodeterminación informativa también posee una faceta instrumental, la cual está caracterizada como un derecho de control a la información personal sistematizada o contenida en bancos de datos o ficheros. Ante esa necesidad de control, tiene contenido múltiple e incluye algunas facultades relacionadas con esa facultad controladora que se manifiestan en aquellas medidas estatales (de tipo organizativo o procedimental), que son indispensables para la protección del ámbito material del derecho asegurado constitucionalmente.



En tal sentido, este derecho implica un modo de ejercicio que se desarrolla primordialmente como exigencia de que existan instituciones y procedimientos para la protección y control de datos frente al Estado y los particulares.

De ahí que, es necesaria la existencia de normas y mecanismos para su salvaguarda y protección ante el uso indebido o mal uso de datos personales y el ejercicio de los derechos que compone su faceta material. En el caso de los datos personales, que obren en poder de instituciones públicas el legislador dispuso que sería este Instituto—artículo 58 letra “b”, de la LAIP—, el ente que garantice dicha protección, mediante el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión o cancelación de datos personales a solicitud de su titular o a través de su competencia sancionadora.

II. En los términos regulados en el artículo 6 letra “a” de la LAIP, son datos personales: “la información privada concerniente a una persona, identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio patrimonio, dirección electrónica, número electrónico u otra análoga”. Asimismo, en su letra “b”, define en qué consisten los datos personales sensibles, estos son los relativos al credo, religión, origen étnico, filiación ideologías políticas entre otros.

De lo anterior se advierte, que el expediente laboral es un dato personal, pues no debe omitirse que, dicho documento se encuentra conformado desde su inicio por información personal, sensible o no, proporcionada por el titular de los datos al empleador que la requiere, con la finalidad de constatar algunos requisitos necesarios para el establecimiento de la relación laboral, formalizada esta, la información pasa a ser resguardada por el empleador, a la cual a lo largo del tiempo, pueden incorporarse más datos del empleado referentes a esa relación laboral. Por tanto, constituye un documento sobre el cual el titular de esa información, puede ejercer los derechos relacionados con la protección de datos personales, regulados en el artículo 36 de la LAIP.

En ese sentido, al tratarse de un documento que contiene datos personales algunos de carácter sensible, el tratamiento de dicha información ha de cumplir con ciertos parámetros descritos dentro de la legislación positiva vigente; es decir, el tratamiento de datos personales, por parte del empleador, debe responder a los principios que inspiran el derecho a la

protección de datos personales, entre ellos: legitimación, legalidad, finalidad, calidad y seguridad de los datos. La legitimación en este caso, es contractual, independientemente del acto administrativo que lo generó, pues se brindaron datos personales del empleado, necesarios para la preparación, celebración y ejecución de la relación laboral, en la que el titular de datos es parte. En cuanto, la finalidad del tratamiento esta debe limitarse a verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales que formarán parte de un registro, de ser otra la finalidad y no existir una excepción en una ley, debe mediar el consentimiento del titular de los datos; respecto de la calidad y seguridad, se deben adoptar medidas que protejan su seguridad y eviten su alteración, pérdida o transmisión de la información personal y sensible que contengan.

De ahí que, al contener dicho documento información personal, los entes obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar la información sensible del empleado, salvo que medie el consentimiento expreso, libre, por escrito o por medio de un equivalente, del individuo o exista alguna excepción establecida debidamente establecida en una ley o motivada por el interés público; y es que, no debe dejarse de lado, que en el expediente laboral de los funcionarios o servidores públicos, converge información pública que contribuye a la transparencia y a la rendición de cuentas, e información privada o datos personales de carácter sensible, los cuales, como se ha mencionado deberán ser tratados de acuerdo a los principios de la materia. En tal sentido, el acceso que se brinde de dicho documento, dependerá del derecho a través del cual se solicita su acceso, siendo así, si se hace en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, deberá entregarse el documento en una versión pública conforme a lo establecido en el artículo 30 de la LAIP; si por el contrario, su acceso se solicita en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, su entrega deberá ser íntegra, garantizando al titular sus derechos a la protección de datos personales, salvo que medie una excepción en una ley.

III. Expuesto lo anterior, corresponde en este apartado determinar si la información solicitada por la apelante, le fue proporcionada en los términos requeridos en su solicitud de acceso a datos personales.



Para tales efectos, con base al objeto de controversia de este procedimiento y a las inconformidades expuestas por la apelante en su escrito de apelación, se examinará si la copia certificada de su expediente laboral le fue entregada de manera íntegra.

De acuerdo al escrito inicial, la apelante solicitó a la UAIP del MJSP la documentación relacionada al *“Expediente que incluya todo lo relacionado a la vinculación laboral, contrato de prestación de servicios profesionales, oficio de autorización de nombramiento en la Ley de Salarios, refrenda de partida de Ley de Salarios, procedimientos administrativos, sancionatorios, promociones, evaluaciones, aumentos salariales, procedimiento y resolución de despido y cualquier información personal que exista en esa dependencia de Estado, respecto a [REDACTED], que es empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, desde el año 2015 a la fecha, desempeñando el cargo de Técnico Especialista IV todo en copia certificada”*, lo anterior perteneciente a la propia solicitante, es decir, se solicitó el acceso a documentación que cuenta con las características para considerarse información confidencial, específicamente datos personales.

Ante dicha solicitud, el oficial de información del MJSP resolvió entregar 45 folios que, según expresa la apelante, no le acompañaron sellos, firmas o rúbricas del funcionario encargado para certificar dicha documentación. A su vez, se manifestó que la documentación brindada se encontraba incompleta, puesto que faltaba lo relacionado al procedimiento de despido de [REDACTED], lo cual debía comprender *“desde la legitimación del funcionario con poder de decisión, procedimiento aplicado, notificaciones efectuadas... para ejercer defensa, identificación de la falta cometida, o análisis técnico que sustente el despido, entre otros”*.

Una vez dicho lo anterior, resulta menester señalar como se ha establecido en el romano II, del apartado 2. *Análisis del caso*, el expediente laboral, se encuentra integrado inicialmente por documentación que es proporcionada por la persona seleccionada para el ejercicio del cargo, en la cual, consta el cumplimiento de los requisitos exigidos por el empleador para desempeñar el puesto que se trate; posteriormente, puede irse incorporando más información por parte del empleado o el empleador, en donde, consten aspectos relativos a la relación laboral. Sin embargo, su contenido generalmente se encuentra regulado en

normativa interna emitida por parte del ente obligado; en ese sentido, para el caso en concreto, se ha revisado la normativa interna del **MJSP** publicada en su portal de transparencia, verificando que no existe normativa que le indique al ente, integrar los expedientes laborales del personal del **MJSP**, con documentación específica.

Lo anterior, no impide que el ente obligado le conceda el acceso íntegro al expediente laboral a su titular, incluyendo *el procedimiento de despido, que comprenda desde la legitimación del funcionario con poder de decisión, procedimiento aplicado, notificaciones efectuadas... para ejercer defensa, identificación de la falta cometida, o análisis técnico que sustente el despido, entre otros.*

De ese modo, en atención al derecho a la protección de datos personales establecido en el artículo 31 de la LAIP, es oportuno, modificar la resolución emitida por el oficial de información del **MJSP**; en el sentido, que entregue a la apelante copia certificada íntegra de su expediente laboral que incluya el procedimiento de despido, que comprenda desde la legitimación del funcionario con poder de decisión, procedimiento aplicado, notificaciones efectuadas para ejercer defensa, identificación de la falta cometida, o análisis técnico que sustente el despido, entre otros, omitiendo en caso de existir datos personales relativos a: “número de Documento Único de Identidad (DUI), Numero de Identificación Tributaria (NIT), ISSS, AFP, domicilio u otro tipo de información sensible conforme a lo establecido en el artículo 6 letra “b” de la LAIP”.

C. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los artículos 6 y 18 de la Cn., 36, 94, 96 letra “b” de la LAIP, 134 y 134 de la LPA, este Instituto **resuelve:**

a) **Modificar** la resolución del oficial de información del **Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)**, del 25 de febrero del presente año, por las razones antes mencionadas

b) **Ordenar** al titular del **MJSP** que en el plazo de cinco días contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue a la apelante, información



consistente en: copia certificada íntegra de su expediente laboral que incluya: El procedimiento de despido, que comprenda desde la legitimación del funcionario con poder de decisión, procedimiento aplicado, notificaciones efectuadas para ejercer defensa, identificación de la falta cometida, o análisis técnico que sustente el despido, entre otros, omitiendo en caso de existir datos personales relativos a: "número de Documento Único de Identidad (DUI), Numero de Identificación Tributaria (NIT), ISSS, AFP, domicilio u otro tipo de información sensible conforme a lo establecido en el artículo 6 letra "b" de la LAIP".

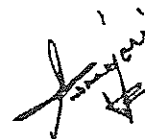
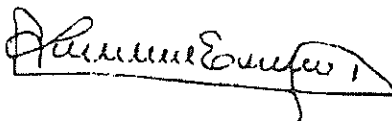
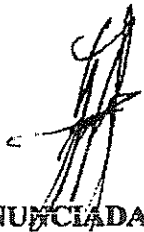
c) Ordenar al MJSP que, a través de su titular, dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del último de los plazos señalados en literales precedentes, de esta parte resolutive, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante o el acta de inexistencia junto a sus anexos, así como su recepción; bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

e) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

f) Publíquese esta resolución, oportunamente.

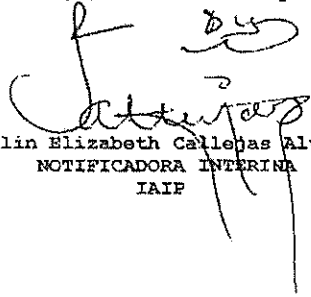
Notifíquese. -



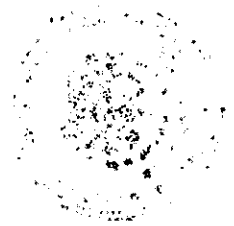
PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

CS/GC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los catorce días del mes de abril de dos mil veintiuno.


Josselin Elizabeth Callejas Alvarado
NOTIFICADORA INTERINA
IAIF





NUE 29-ADP-2019 (AG)

_____ contra Policía Nacional Civil (PNC)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las doce horas con ocho minutos del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.

Descripción del caso:

I. El apelante _____, en adelante el apelante, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, solicitud de datos personales conforme al artículo 36 letra "a" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a "copia del acta o informe del día 28 de septiembre de 2016, el cual fue un procedimiento en el desvío de Opico, por elementos de la DCI, por el señor cabo _____, quien andaba al mando, porque esta mencionado en el acta o informe requerido".

En relación con ello, el Oficial de Información de la **PNC** resolvió: "brindar versión pública del documento requerido, debido a que con base en los artículos 19 literales b), d), f), g) y h), 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ese tipo de información está clasificada como reservada".

Al respecto el apelante manifestó su inconformidad, en atención a que, solicita se le entregue la información requerida, puesto que él está involucrado en el contenido de esa acta; y considera que no existen elementos para reservar dicha información, pues no está en proceso de investigación y el caso esta archivado.

II. El ciudadano interpuso recurso de apelación ante este Instituto conforme al artículo 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose el comisionado Andrés Gregori Rodríguez, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.

El 30 de mayo del presente año, el oficial de información de la **PNC**, remitió vía electrónica el expediente administrativo relacionado con el presente caso. Posteriormente, en fecha 31 de mayo del corriente año, el Oficial de Información de la **PNC** remitió el expediente

administrativo relacionado con el presente caso; en atención al requerimiento realizado por este Instituto, mediante auto de las doce horas del treinta de mayo de dos mil diecinueve.

El 14 de junio del año en curso, [REDACTED], presentó escrito por medio del cual manifestó actuar en calidad de apoderado general judicial de la PNC, acreditando dicha calidad con copia certificada de poder general judicial y administrativo con cláusulas especiales de Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Director General de la PNC y consecuentemente representante legal de dicha institución.

En esa misma fecha, presentó informe justificativo y solicitó se tenga por evacuado dicho requerimiento.

III. Finalmente, se realizó la audiencia oral con las partes, en la que ofrecieron pruebas, constando de acuerdo al acta de audiencia que fueron rechazadas las pruebas ofrecidas por la parte apelante por no ser útiles y tampoco pertinentes con el objeto del presente procedimiento, solo admitiéndose la ofrecida por el apoderado del ente obligado, por guardar relación con lo discutido en esta apelación, tal como se plasmará en el romano II del análisis del caso.

Asimismo, reiteraron los argumentos vertidos inicialmente en el recurso de apelación, y el informe de justificación, respectivamente.

Análisis del caso:

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Consideraciones sobre la protección de los datos personales y el derecho de acceso a los datos personales; (II) valoración de la prueba aportada por las partes; (III) examen sobre el cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva; y, (V) determinación de la naturaleza de la información y la consecuente obligación de entregarla.

I. Los datos personales son necesarios para que una persona pueda interactuar con otras, o con una o más organizaciones sin que sea confundida con el resto de la colectividad, y para que puedan cumplir con lo que disponen las leyes.

Bajo el concepto de protección de datos personales o autodeterminación informativa, el titular (o dueño) de dichos datos es la propia persona, lo que implica el derecho a elegir qué se desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control personal sobre su propia información.

Es importante señalar que el tratamiento de los datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloque, supresión, comunicación por transparencia o por difusión, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. Este, en principio, depende del conocimiento y consentimiento del titular del dato personal, sin embargo, existen excepciones legales a esos presupuestos. OC

Por otro lado, dicho tratamiento debe ser regido por los principios que informan al derecho a la protección de datos personales (legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad, confidencialidad, y responsabilidad); asimismo, debe facilitar los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, como: acceder, rectificar, cancelar u oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos, en posesión de entes del Estado (artículo 36 de la LAIP) o de una entidad privada.

Es preciso aclarar que la LAIP solo regula los mecanismos de ejercicio y protección a los datos personales que se encuentran en posesión y tratamiento en bases de datos de los entes públicos obligados a la Ley.

El **derecho de acceso a los datos personales**, es el poder de disposición o decisión que tiene el titular sobre la información que le concierne, conlleva necesariamente el derecho de acceder y conocer si su información personal está siendo objeto de tratamiento, así como su alcance, condiciones y generalidades de su tratamiento.

En relación con lo anterior, es importante mencionar que los titulares de los datos personales tienen derecho a: a) acceder a la información concerniente a su propia persona; b) recibir su información en forma clara, comprensible y a través de un procedimiento sencillo y a la brevedad posible.

II. Una vez determinado lo anterior, es preciso plasmar en esta resolución el análisis efectuado en la audiencia oral, por este Instituto, de los elementos probatorios vertidos en el presente procedimiento por ambas partes.

a. Por medio de escrito presentado el 28 de mayo de 2019, el apelante ofreció prueba documental consistente en: 1) Constancia de servicio cuando estuvo destacado, y la función que desempeñaba, 2) constancia de antecedentes disciplinarios, 3) constancia de traslados donde



estuvo destacado, 4) constancia de antecedentes disciplinarios del EXMOP, 5) constancia de sobre sueldos que le pagaban por andar con la jefa policial, 6) renuncia de su persona por acoso de jefes policiales y constancia de boleta de pago, 7) constancia de permiso de armas de tiempo donde firmó la jefa, 8) dos denuncias de la fiscalía por el delito de amenazas por este caso, 9) publicación de periódico la cual sale como noticia la pareja de la jefa, 10) contrato de arrendamiento el cual está firmado por la jefa policial; y, 11) diploma de felicitación o reconocimiento otorgado a su persona por la jefa policial. Respecto a dichos elementos, por medio de auto emitido a las doce horas del dos de julio del presente año, este Instituto manifestó que dichos elementos probatorios se tendrían por ofrecidos, y que su admisión se determinaría en audiencia oral, debiendo el apelante manifestar su pertinencia y utilidad en dicha fase procesal.

Durante el desarrollo de la audiencia oral, el apelante ofreció como medios probatorios la documentación consistente en: 1) copia simple de oficio de la Fiscalía General de la República; 2) copia simple de documento dirigido al jefe de Unidad Asuntos Internos en fecha 24 de mayo de 2019; 3) respuesta emitida por el jefe de la unidad de asuntos internos en fecha 27 de mayo de 2019; 4) copia simple de solicitud de certificación de la Fiscalía General de la República, oficina fiscal de Santa Tecla; 5) contrato general de telecomunicaciones y anexos de servicios; 6) copia imple de detalle de llamadas.

Respecto a los 17 documentos ofrecidos en calidad de prueba documental el apelante manifestó que los primeros once documentos (aportados por medio de escrito de fecha 28 de mayo de 2019) los aportó con la finalidad de comprobar que fungió como seguridad de personal de la PNC, y que el día del procedimiento estaba trabajando; asimismo, para determinar los motivos por los que se encontraba ese día en la intervención, en el desvío de Opico.

En relación a los elementos aportados en la audiencia, el apelante manifestó que en razón a las llamadas de acoso que ha recibido en la cual le dicen que ya no siga buscando información respecto a la “jefa”, presenta dichas pruebas para demostrar que él ha seguido la investigación en la fiscalía y que no solo ha presentado las denuncias de acoso en esa instancia, sino que, ha seguido el procedimiento ante dicha institución.

Debido a lo expuesto por el apelante, el Pleno de este Instituto le corre traslado al apoderado del ente obligado para que se pronuncie respecto a la documentación ofrecida por el apelante. En síntesis manifestó que la prueba no tiene íntima relación directamente con la petición realizada por el apelante, siendo dicha prueba superflua y solicita que se declare sin lugar.

En ese sentido, este Instituto resolvió que el apelante no necesita acreditar su calidad de ex policía para realizar una solicitud de información, ya que como ciudadano él ya tiene ese derecho y debido a que los documentos que incorpora se refieren al vínculo que él tuvo como agente policial; y en el caso de las llamadas, no es competente ya que es la esfera de competencia fiscal. Dicho lo anterior, respecto a la prueba ofrecida por el apelante se resolvió rechazar la documentación por no ser útil ni pertinente con el objeto de controversia de este procedimiento. *O.C.*

b. Por su parte, la representación del ente obligado ofreció como prueba documental el acuerdo PNC Dirección General n° A 1010-09 del 2016, el acuerdo SDG 001-2017, y, el acto administrativo de reserva, que en su oportunidad el subdirector de investigaciones realizó respecto a ese tipo de documentos. En ese sentido, respecto al primer acuerdo manifestó que pretende probar que ese tipo de actividad diaria que realiza el personal policial, no puede quedar en la esfera del conocimiento de los particulares, ya que el ahora apelante ya no es agente de autoridad; es por ello, que entregaron una versión pública del documento requerido por el ciudadano. *je'*

Por otro lado, con relación al segundo de los acuerdos suscrito por el ex director de la PNC, manifestó que la finalidad es la misma que el anterior, pues busca comprobar lo relacionado a las actividades diarias, y se relaciona con lo solicitado por el apelante, pues la intervención efectuada en San Juan Opico, documenta el que hacer de los agentes policiales. *GH*

Asimismo, con el mismo objetivo presentó el acto administrativo de reserva dado por el ex sub director de investigaciones, en el que declara como información reservada lo relacionado con la DCI.

Finalmente, se le brindó traslado al apelante respecto a la prueba presentada por el apoderado de la PNC, manifestando que se opone a la misma.

Por su parte, el Instituto decidió aceptar la documentación ofrecida por la PNC estableciendo que dicha información será cotejada con el índice de reserva que dicha institución ha tenido con este Instituto.

Respecto al requerimiento realizado por este Instituto al Oficial de Información del IAIP, en fecha 24 de julio del presente año, dicho servidor público dio respuesta, estableciendo lo siguiente: I. En fecha diecinueve de julio del presente año, se recibió la última actualización del índice de información reservada de la Policía Nacional Civil; II. Se realizó una comparativa



entre la documentación notificada referente al Acta de Audiencia NUE 29-ADP-2019 y las declaratorias de reserva adjuntas; en ese sentido, de acuerdo a los registros que lleva esta Unidad se determina que la declaratoria de reserva con código DG03/DR-01-2016: si es parte de dicho índice; con respecto a la declaratoria de reserva con código DG/SDG/SAEO/2312/2017: no se ha encontrado en el índice remitido.

III. Para el caso en comento, el ente obligado resolvió brindar una versión pública de la información requerida, estableciendo que “a través de memorándum SIN/DCI/0193/2019, de fecha 20-03-2019, se informa que el documento requerido se encuentra previamente clasificado como información reservada”.

Asimismo, en dicha resolución el Oficial de Información transcribió lo siguiente: “le comunico que con base en los artículos 19 literales “b” (la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública), “d” (la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona), “f” (la que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación, o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes), “g” (la que comprometiére las estrategias y funciones estatales) y “h” (la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero), 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ese tipo de información está clasificada como información reservada”.

En ese sentido, es pertinente señalar que uno de los límites al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) es la **información reservada**, la cual se define como *aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP* –específicamente en el art. 19 de la LAIP-, *en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas* - art. 6 letra “e” de la LAIP-.

Ahora bien este Instituto ha sostenido reiteradamente que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos (a) **legalidad**; (b) **razonabilidad**; y, (c) **temporalidad**, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

a) **Legalidad:** La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

Para que se cumpla con el requisito de la legalidad no basta con la invocación de la causal en que se fundamenta la declaratoria de reserva sino que, es también indispensable ^{O.C.} acreditar que se cumple con las condiciones necesarias para su aplicación; es decir, que los hechos y circunstancias del caso se ajustan a lo previsto por la ley.

En ese orden, cabe aclarar que la PNC en la resolución emitida por el Oficial de Información estipuló que “brindar versión pública del documento requerido”.

Posteriormente, en el informe de ley el apoderado de la PNC estableció que “los argumentos expuestos por el Jefe de la División Central de Investigaciones a través del memorándum SIN/DCI/0193/2019, quien informa que el documento requerido se encuentra previamente clasificado como Información reservada, en base a lo establecido en los artículos 71 y 72 de la LAIP, por lo tanto, se resolvió brindar versión pública”.

Junto al documento aportado en audiencia oral, consistente en el acto administrativo consta información de reserva de la subdirección de investigaciones, se hace alusión a que en la información contenida en los casos de investigación, es información indiciaria no certera, [...]; en párrafos posteriores, se mencionan aspectos relacionados a “los fundamentos constitucionales ya mencionados se tiene también salvaguardar la vida, la integridad de las personas en los casos de personas con difusión o circular roja de Instituciones policiales internacionales con la cual se realiza otro tipo de procedimientos”.

En el acuerdo PNC/DG/No. A-1010-09-2016 se establece que “se considera que hacer del conocimiento público el contenido de los libros y expedientes de control interno, podría causar un grave daño al interés público, ya que dicha información podría ser utilizada por delincuentes, estructuras criminales o grupos terroristas, para anticipar capacidades policiales, así como para interrumpir y afectar el servicio policial, lo cual resultaría en detrimento de la seguridad pública a nivel nacional; y peor aún, de otorgarse dicha información, se estaría poniendo en grave y evidente peligro, bienes jurídicos que requieren mayor protección.

Debido a lo anterior, este Instituto advierte que en la prueba documental aportada por el apoderado de la PNC, se fundamenta la resolución de reserva, en razón de que brindar el acceso a la información en el presente caso pondría en **peligro la vida, integridad física, la defensa nacional y la seguridad pública**; sin embargo, se observa la falta de acreditación respecto a las causales g) y h) mencionadas en el documento que tiene como base la reserva de la información.



b) **Razonabilidad:** Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública en reserva. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

En cuanto a la razonabilidad este Instituto advierte que en el documento suscrito por el Comisionado Coto Castaneda código DG03/DR/0172016, en el que se declara la reserva de la información; en el romano IV., se establece: *“únicamente podrá tener acceso o conocimiento de su contenido, la Jefatura de la Unidad policial, personal operativo y administrativo y demás personas involucradas de manera directa en la ejecución, producción, obtención y transformación de la información de los libros y expediente de control interno de las distintas Unidades Policiales que conforman y dependen directamente de la Dirección General de esta Institución Policial, y las Instituciones y Autoridades administrativas y judiciales que legal y constitucionalmente, tengan competencias para requerir o solicitar la información declarada en reserva antes detallada”*.

Por lo tanto, se evidencia que existe una contradicción puesto que, *la persona que solicita el acceso, no solo es titular de la información que solicita; si no que, debido a lo expuesto en dicho romano se habilita que las personas involucradas de manera directa pueden tener acceso a dicha información; lo cual en el presente caso, se constata por ser él, parte de las personas involucradas en el procedimiento y ser una de las personas que suscriben el documento*.

Sobre el requisito de temporalidad es inoficioso valorarlo, pues se ha logrado verificar que no existe motivos de razonables para no permitirle el acceso al apelante.

Es importante mencionar, que la PNC ha realizado una declaratoria genérica de información, provocando que no exista certeza de los documentos en los que recae la limitación de divulgación de la información; esto es contrario al principio de máxima publicidad. Asimismo, dicha reserva genérica permite que el ente de forma arbitraria y antojadiza, encaje cualquier tipo de información al acto de la reserva.

En conclusión, en virtud que la PNC no logró acreditar que la “copia del acta o informe del día 28 de septiembre de 2016, referente al procedimiento en el desvío de Opico, realizadas

por elementos de la DCI", sea información de tipo reservada para el apelante, es procedente ordenar la entrega de lo requerido a Manuel de Jesús Valenzuela Lima, pues él, figuró en dicho operativo. En ese sentido, de conformidad con el Art. 36 letra "a" de la LAIP, debe entregársele sin ningún tipo de tachaduras, pues la PNC no ha manifestado entre sus argumentos que exista otro tipo de información distinta a la reservada para ordenar en un sentido diferente.

3. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 2, 6, 85 y 86 de la Constitución; 52 inciso 3°, 58 letra "d", 90, 94, 96 letra "d" y 102 de la LAIP; 79 y 80 del RELAIP, y, 112 LPA, este Instituto **resuelve**:

a) **Revocar** la resolución emitida por el Oficial de Información de la **Policía Nacional Civil (PNC)**, de fecha ocho de abril de 2019, en cuanto brinda una versión pública de la información relativa a *"copia del acta o informe del día 28 de septiembre de 2016, el cual fue un procedimiento en el desvío de Opico, por los elementos de la DCI, por el señor cabo [REDACTED], quien andaba al mando"*, por no haber demostrado que dicha información se encuentra reservada de conformidad con los requisitos legales establecidos, según lo expuesto.

b) **Ordenar** a la PNC que a través de su Oficial de Información, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a [REDACTED] la "copia del acta o informe del día 28 de septiembre de 2016, del procedimiento en el desvío de Opico, por los elementos de la DCI, cabo [REDACTED], quien andaba al mando", sin ningún tipo de tachaduras.

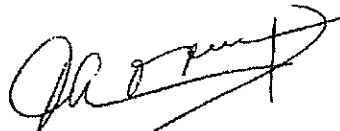
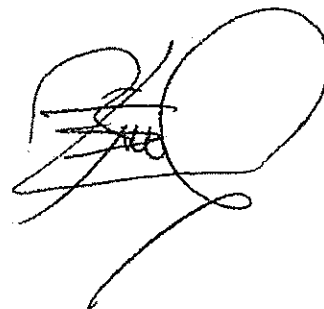
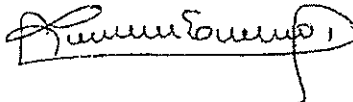
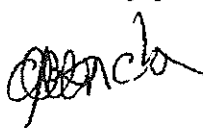
c) **Ordenar** a la PNC que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección oficialreceptor@laip.gob.sv

d) Hacer saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

f) Publíquese esta resolución oportunamente.

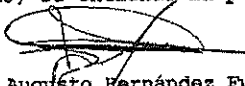
Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR INTERINO
IAIP

